

6,40

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

32.º de 193 países

10.º de 35 países americanos

6.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 6,20

TRATA DE PERSONAS	7,00
TRÁFICO DE PERSONAS	6,50
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	4,50
TRÁFICO DE ARMAS	6,50
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	9,00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	2,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	7,00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	9,00
COMERCIO DE HEROÍNA	5,50
COMERCIO DE COCAÍNA	9,00
COMERCIO DE CANNABIS	6,00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	4,50
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	5,00
DELITOS FINANCIEROS	5,50



ACTORES CRIMINALES 6,60

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	7,00
REDES CRIMINALES	8,50
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	7,50
ACTORES EXTRANJEROS	6,00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	4,00



4,38

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA



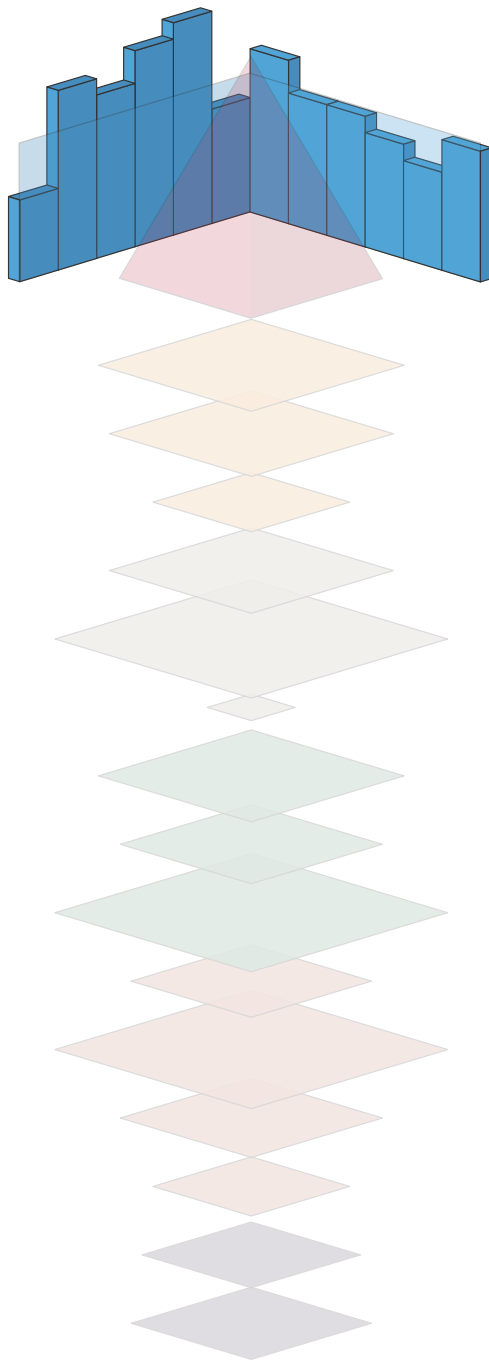
Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

PERÚ



4,38
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

119.º de 193 países
24.º de 35 países americanos
8.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	2,50
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	6,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	3,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3,50
PREVENCIÓN	3,00
ACTORES NO ESTATALES	4,00

6,40
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES	6,20
ACTORES CRIMINALES	6,60



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Perú es un país de origen y destino de la trata de personas, cuyo principal motor es la demanda interna. A pesar de los esfuerzos por combatirla, las restricciones de la COVID-19 han dificultado la identificación y la prevención de la trata, lo que ha dado lugar a nuevas formas de explotación, mediante la tecnología digital. Las redes criminales tienen como objetivo a venezolanas vulnerables y pagan sus gastos de transporte, alojamiento y manutención para obligarlas a prostituirse y pagar cuotas. Las mujeres y los niños, especialmente los indígenas, son las víctimas más frecuentes. La corrupción entre los funcionarios exacerba este mercado delictivo. El tráfico es más frecuente en las zonas cercanas a las explotaciones mineras ilegales. Los turistas de Estados Unidos y de Europa también contribuyen al problema, explotando a las víctimas en zonas turísticas populares, como Cuzco, Lima y la Amazonia peruana.

Perú es también un país de destino y tránsito para el contrabando de personas, especialmente para las procedentes de Venezuela, Haití y países africanos y asiáticos, y para las que pretenden llegar a América del Norte. Hay informes de transporte ilegal de venezolanos a través de la frontera entre Ecuador y Perú. El tráfico de personas es facilitado por conductores vinculados a empresas de transporte terrestre, particularmente en la ciudad de Tumbes y la región de Madre de Dios. Las redes criminales incluyen a agentes de Policía y a funcionarios de migración que trabajan en los puntos de control a través de la frontera y facilitan las actividades ilegales. La actual situación política de Perú puede someter a los contrabandistas a extorsiones, estafas y robos, cuando intentan acercarse a sus puntos de conexión.

La extorsión y los cobros ilegales por protección son un mercado delictivo muy extendido en Perú, que afecta a diversos sectores, como el transporte público, la construcción y el comercio. Los grupos delictivos utilizan una serie de tácticas, como las «cuotas de seguridad» y los préstamos abusivos, para extorsionar a empresas y particulares. Estas prácticas han aumentado durante la recuperación económica posterior a la pandemia de la COVID-19. Aunque las fuerzas del orden han desmantelado varios grupos delictivos y han detenido a sus miembros, la Policía Nacional de Perú recibió más denuncias por extorsión en el 2022 que en el 2021, lo que indica que el problema sigue siendo motivo de preocupación.

TRÁFICO

Perú sigue siendo un país de tránsito para el tráfico de armas, con armas procedentes de EUA y México que se transportan a través de Perú a Ecuador y luego a Colombia. Este comercio ilícito de armas cuenta con el apoyo de grupos delictivos organizados de todo el país, especialmente en relación con la producción de cocaína. Los beneficios del mercado benefician a los actores nacionales, que venden en el mercado negro armas, como pistolas, revólveres y escopetas de avancarga. A pesar del aumento de la violencia asociada a las actividades delictivas en todo el país, faltan políticas regionales para abordar la magnitud y el alcance del problema y la capacidad de la Policía para investigar este mercado es muy limitada. La frontera entre Perú y Ecuador sigue desempeñando un papel importante para los traficantes que pretenden intercambiar armas entre ambos países. Las armas y las municiones que llegan a Ecuador desde Perú también llegan a los grupos guerrilleros y armados activos en Colombia.

Los productos falsificados son un problema importante en Perú, con un comercio estimado en cientos de millones de dólares. Los productos sanitarios, en particular los medicamentos, son un importante motivo de preocupación, ya que casi una cuarta parte de los medicamentos que se venden en Perú son falsos. La pandemia de la COVID-19 también ha beneficiado al mercado de productos falsificados y las autoridades llevan a cabo operaciones para impedir la entrada de productos farmacéuticos falsificados, que podrían poner en peligro la salud de los pacientes. Además, la integración con grupos transnacionales en las zonas fronterizas les ha permitido comerciar y traficar con productos falsificados hacia los países vecinos. No hay evidencias de que el comercio ilícito de productos falsificados sea prevalente en Perú.

MEDIOAMBIENTE

Actividades ilegales, como la tala, la minería y el comercio de especies silvestres, siguen alimentando la deforestación y amenazando a las comunidades indígenas de Perú. La tala es el delito más común contra la flora, asociado a otros, como el narcotráfico y la minería ilegal. La deforestación en Perú alcanzó niveles históricos durante la pandemia de la COVID-19 y la mayor parte del comercio de madera es ilegal y genera cientos de millones de dólares para las redes de traficantes. Los delincuentes aprovechan las zonas grises de la legislación, manipulan el papeleo y evitan los puntos de control, para vender directamente a los mercados locales o pasar madera de contrabando a los países vecinos. Hacer frente con eficacia a este delito es todo un reto, debido a la extensión del territorio del país.



En los últimos años, el tráfico de fauna salvaje ha experimentado un repunte en Perú, con miles de animales vivos incautados cada año por las fuerzas de seguridad. El comercio ilegal de aletas de tiburón en la frontera entre Ecuador y Perú sigue siendo problemático, con destinos como Estados Unidos, Europa y Asia. Los indígenas de la región amazónica capturan animales y los venden a intermediarios, que a su vez los venden a minoristas en mercados locales o a coleccionistas internacionales. Las especies más traficadas en Perú son aves, pequeños primates, animales de mayor tamaño, como el oso andino, vicuñas, monos y diversos felinos. Partes de animales, reptiles y anfibios también forman parte de este comercio ilícito. La fauna silvestre se vende en los mercados locales, sin que exista una conciencia social adecuada de su impacto negativo, y los funcionarios mal pagados suelen aceptar sobornos a cambio de protección y de permitir el transporte de animales de procedencia ilegal.

La minería ilegal de oro es una actividad delictiva omnipresente en Perú, cuyos beneficios anuales alcanzan los miles de millones de dólares, lo que la hace más lucrativa que el tráfico de cocaína. Una quinta parte de las exportaciones de oro de Perú son de origen ilegal y los actores criminales cobran a los mineros por escoltar maquinaria, productos químicos y oro a cambio de «paz y seguridad» en sus dominios. La mayoría de los grupos delictivos implicados en la minería ilegal son redes familiares, en las cuales la corrupción es rampante, con funcionarios y fiscales que facilitan la impunidad. En las regiones donde predomina la minería ilegal también hay una alta incidencia de trata de seres humanos, sobre todo con fines de explotación laboral sexual. El contrabando a otros países de oro extraído ilegalmente se ha vuelto más rentable en los últimos años, lo que aumenta aún más la preocupación.

DROGAS

Las mafias de la droga peruanas exportan principalmente opio, ya que carecen de los laboratorios necesarios para transformarlo en heroína. Sin embargo, el cultivo de opio va en aumento en Perú y el látex de opio se transporta desde tres regiones (Piura, Cajamarca y Amazonas) hasta Ecuador. El mercado del opio se está expandiendo a otras regiones, como La Libertad, Junín, Cusco y Lima. Los actores nacionales se benefician del cultivo de opio y de la microcomercialización de heroína. Sin embargo, actualmente existen pocos incentivos económicos o geográficos para desarrollar este mercado, ya que el cultivo de coca sigue siendo muy rentable.

A pesar de las medidas policiales para disminuir las plantaciones de coca, Perú sigue siendo un importante país de origen de cocaína. La pandemia de la COVID-19 y la caída de los precios del café han incrementado el cultivo de coca. Las operaciones que destruyen los cultivos de coca no hacen sino desplazar el comercio a otros territorios. En los últimos años se ha producido un repunte de la demanda

y la producción de cocaína, con un aumento de la demanda internacional y un incremento de la producción. Las mafias serbias han desplazado a las mexicanas y las colombianas como los actores que controlan el mercado en Perú, con Sendero Luminoso proporcionando seguridad a los cultivos en la región del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). La cocaína producida en Perú se transporta casi exclusivamente al mercado internacional, a través de diversas rutas internacionales.

Perú se ha convertido en un importante productor de marihuana, sobre todo en la región de Huánuco, que ha sido una fuente importante para los vecinos Bolivia y Chile. En la región del VRAEM, donde operan restos de Sendero Luminoso y traficantes de cocaína, también han aumentado las plantaciones de marihuana. Aunque el cultivo, el transporte y la venta de cannabis medicinal es legal en Perú, la mayoría de los casos de incautación de marihuana notificados en el país están relacionados con la microcomercialización de drogas. Pequeñas redes delictivas abastecen la demanda local de cannabis en Perú.

Perú es también un país de origen de la mayoría de los suministros utilizados para fabricar drogas sintéticas, que luego se envían a Paraguay. En Perú, las incautaciones de drogas sintéticas suelen estar relacionadas con redes delictivas poco estructuradas y se ha producido un aumento del consumo de estas drogas entre los jóvenes que acuden a fiestas, sobre todo en Lima. Entre las drogas más populares se encuentran la 25I-NBOME y la 2CB, conocida como «cocaína rosa/cera», procedente de Colombia. Los agentes nacionales que transportan y microcomercializan las drogas se benefician del mercado de drogas sintéticas, con alguna posible participación de ciudadanos extranjeros.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Recientemente, Perú ha sido blanco de ciberataques de grupos internacionales de delincuencia organizada contra servicios de inteligencia e infraestructuras críticas. Las fuerzas militares también han sido atacadas, con la consiguiente filtración de información clasificada. Sin embargo, existe una transparencia limitada en cuanto a la presencia y la escala de los delitos ciberdependientes en Perú. La falta de capacidades tecnológicas sólidas en el sistema financiero y las instituciones estatales crea un terreno fértil para que prosperen estos delitos. El Gobierno peruano no ha hecho ninguna declaración pública sobre los recientes ataques, lo que suscita preocupación sobre su capacidad para hacer frente a los retos institucionales y tecnológicos de la ciberdelincuencia.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros van en aumento, incluidas las estafas en línea, como el phishing y el fraude informático, que han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos

años. Los intentos de suplantación de identidad se realizan con frecuencia a través del correo electrónico o de mensajes en las redes sociales, mientras que la evasión fiscal sigue siendo un problema frecuente en el país. El Gobierno peruano también ha identificado numerosos casos de actividades irregulares relacionadas con la malversación de fondos durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, actualmente no existen pruebas que vinculen estos actos con la delincuencia organizada.

ACTORES CRIMINALES

La presencia de redes criminales es un problema importante en Perú, especialmente en Lima y la Provincia Constitucional del Callao, donde se dedican a la microcomercialización de drogas, robos, extorsión, tráfico de personas y delitos contra la flora. Estas redes también utilizan tácticas como la contratación de paramilitares para mantener el control de sus mercados delictivos. Además, trabajan en conexión con mafias internacionales, especialmente de Serbia, Colombia y México, para procesar y transportar cocaína a Lima y a regiones fronterizas. Algunos de estos grupos también tienen vínculos con la actividad delictiva dentro de las cárceles locales.

Las organizaciones delictivas están profundamente arraigadas en el Estado y la mayoría de las investigaciones oficiales sobre grupos delictivos descubren cierto grado de complicidad por parte de las fuerzas del orden, los políticos e incluso los jueces. Se ha acusado a agentes de Policía peruanos de proporcionar seguridad durante el transporte de mercancías ilícitas, incluidos animales y madera de procedencia ilegal, así como de ofrecer protección a los delincuentes. La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado la corrupción en varias partes del país.

Muchos grupos delictivos de Perú son pequeños y operan a escala local. Los grupos de tipo mafioso ejercen un control

significativo sobre determinadas regiones, como Loreto y Ucayali, donde se dedican principalmente al tráfico de madera, y la zona del VRAEM, controlada por narcotraficantes y el grupo guerrillero Sendero Luminoso. Otros grupos criminales operan en todo Perú, controlando territorios e infiltrándose en las estructuras del Estado, al tiempo que subcontratan algunos de los recursos que necesitan.

Perú es también el hogar de varios grupos delictivos extranjeros que se dedican al tráfico de drogas y a otras actividades ilícitas. Las mafias balcánicas, por ejemplo, son fuertes en el país y son responsables del tráfico de cocaína de Perú a Europa, con la ayuda de narcotraficantes locales. Las redes venezolanas se dedican a operaciones de trata de seres humanos con el objetivo de explotar sexualmente a sus víctimas, mientras que otros grupos delictivos extranjeros destacados son la mafia italiana y los cárteles colombianos, mexicanos y ecuatorianos. Estos delincuentes extranjeros se apoyan en agentes locales para cultivar hojas de coca y transportar cocaína por todo el país.

La colaboración de empresas con actores criminales en Perú es fundamental en determinados mercados delictivos. En el comercio ilegal de oro, por ejemplo, los grupos criminales se apoyan en empresas legales de la industria minera, así como en empresas locales. Estas empresas son actores clave en la cadena de suministro ilícita, ya que compran una notable cantidad de oro a mineros ilegales a precios considerablemente reducidos. Debido a una supervisión deficiente, las empresas pueden vender y exportar oro ilegal, encubriendo su origen mediante transacciones y documentos falsos. Del mismo modo, en el caso de la tala ilegal, se emplean empresas de transporte legales para trasladar los productos y se les proporciona documentación falsa sobre el origen de la madera. Estas empresas utilizan a particulares con dificultades económicas para cobrar cheques a las organizaciones delictivas.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El panorama político de Perú ha estado plagado de inestabilidad y la actual presidenta se enfrenta a una oposición y unas críticas generalizadas tras su nombramiento. La falta de legitimidad democrática en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo ha provocado protestas y llamamientos a la dimisión de todos los políticos. El liderazgo político de Perú parece ineficaz a todos los niveles, con escasa capacidad para controlar e impedir el florecimiento de los mercados ilegales. Aunque se han aprobado algunas

políticas para combatir el crimen organizado, no existe voluntad política ni profesional para atajar eficazmente la cultura de la ilegalidad que ha impregnado la sociedad peruana. El Poder Judicial peruano ha demostrado unos niveles impresionantes de independencia y resistencia en casos de gran repercusión, lo que ha permitido investigar y procesar a varios políticos de muy alto nivel. Sin embargo, esto no parece un factor disuasorio de la corrupción en el país, ya que numerosas élites políticas se han enfrentado a acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos

humanos. Además, el acceso a la información en Perú es bastante bueno, aunque todavía no existe un órgano de apelación independiente.

Perú participa activamente en los esfuerzos de cooperación internacional para combatir la corrupción y el crimen organizado. El país también ha suscrito varios tratados de extradición y en general se observa el cumplimiento de estos procedimientos. El país ha ratificado y puesto en vigor todos los tratados y convenciones pertinentes, relativos a la delincuencia organizada. También ha implementado varias políticas y leyes nacionales para hacer frente al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y otras actividades delictivas. Sin embargo, muchas de estas leyes no se aplican adecuadamente y los procedimientos penales tienden a ser débiles y lentos.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial en Perú es lento y carece de confiabilidad en relación con los casos de crimen organizado que no son de alto perfil. Las notificaciones judiciales tardan mucho tiempo en llegar a todas las partes implicadas. En los últimos años, Perú ha creado las Cortes Superiores de Justicia, especializadas en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. Se trata de siete tribunales penales especializados, cuatro tribunales de apelación permanentes y tres tribunales transitorios que se ocupan específicamente de casos de delincuencia organizada y corrupción. Las prisiones de Perú están superpobladas: ese es un problema sustancial en todo el país.

Los recortes presupuestarios y los traslados de funcionarios a otros departamentos han suscitado preocupación por las represalias políticas y han debilitado las investigaciones sobre corrupción y delincuencia organizada. A pesar de estos retos, la política nacional de Perú ha dado como resultado el desmantelamiento de varios grupos mafiosos implicados en asesinatos por encargo, secuestros, extorsión y tráfico de personas en todo el país. Sin embargo, la comunidad internacional y las organizaciones civiles han denunciado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía durante protestas masivas. La eficacia de la Policía en la prevención y el control de la delincuencia es mínima y las restricciones presupuestarias limitan su capacidad para avanzar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Los grupos organizados han tomado el control de la frontera norte de Perú con Ecuador y de las fronteras sur con Bolivia y Chile y tienen como objetivo a venezolanos, menores y peruanos, para actividades de contrabando de personas. A pesar de la presencia de campos de minas y cámaras termográficas en la frontera chilena con Perú, los contrabandistas han podido transportar a ciudadanos extranjeros, utilizando documentación fraudulenta. La situación estratégica de Perú para el tráfico de cocaína, debido a su idoneidad para el cultivo de la hoja de coca y a las

vastas zonas sin gobierno, permite el florecimiento de grupos como Sendero Luminoso y de clanes de narcotraficantes. La frontera del país con Bolivia y Brasil da acceso al creciente mercado nacional de cocaína y a las rutas marítimas internacionales y las autoridades informan de un aumento de la producción de cocaína en las zonas fronterizas. El río Napo se ha visto especialmente afectado por actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se considera que Perú tiene un riesgo bajo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El país ha logrado mejoras significativas en los últimos años en materia de prevención del lavado de activos, incluyendo la aprobación del Plan Nacional. Sin embargo, a pesar de que cuenta con marcos legales y políticas adecuadas en materia de lavado de activos, es necesario priorizar las investigaciones e incrementar los recursos para fortalecer la capacidad operativa y de gestión del ministerio público.

La economía informal en Perú ha crecido y se ha hecho más prevalente en múltiples sectores económicos. Perú también tiene algunos de los impuestos más altos de la región sudamericana, lo que incentiva a los mercados criminales a contrabandear mercancías. La delincuencia organizada es especialmente frecuente en la costa norte, donde ha surgido paralelamente al crecimiento económico. Empresas de todos los tamaños han sido víctimas de extorsión, especialmente en el transporte público, la construcción y el comercio. Este fenómeno se ha extendido por varias ciudades, del Callao a Tumbes. La Policía viene combatiendo la extorsión mediante «megaoperaciones» en las que participan todas las fuerzas del orden.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Perú reconoce la trata de personas y el tráfico de migrantes como delitos contra la dignidad humana y proporciona medios para indemnizar a las víctimas. Sin embargo, los servicios de apoyo a las víctimas LGBTQ+ y a los hombres siguen siendo limitados. La legislación nacional peruana ofrece protección a testigos, víctimas y colaboradores implicados en investigaciones sobre delincuencia organizada, lo que incluye protección policial, cambio de domicilio y protección de datos personales. No obstante, se sabe que las organizaciones delictivas han asesinado a testigos protegidos.

El Ministerio del Interior de Perú ha introducido una Guía para la Prevención del Crimen Organizado, destinada a reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y promover la seguridad ciudadana. Sin embargo, la eficacia de las iniciativas para prevenir la delincuencia se ve obstaculizada por una aplicación esporádica, la falta de coordinación interinstitucional y la escasez de recursos.

Los periodistas de Perú sufren acoso judicial, abusos físicos y verbales por parte de activistas políticos y una protección

inadecuada, a pesar de las garantías de libertad de prensa. Defensores del medio ambiente han sido asesinados por agentes vinculados al narcotráfico, la tala ilegal y la minería, lo que ha dado lugar a abusos contra los derechos humanos. Los agentes no estatales que informan sobre la corrupción y las organizaciones delictivas en zonas remotas se enfrentan a la violencia e incluso a la muerte. La agitación política y las manifestaciones violentas, desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, han suscitado preocupación por posibles abusos contra los derechos humanos en el país. El limitado acceso a la información pública y la inadecuada protección de los periodistas, que sufren intimidaciones y abusos, agravan la situación.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.